

PERSPECTIVAS

SUPLEMENTO DE ANÁLISIS  
POLÍTICO, NO. 40

FEBRERO 2010

# Baile de máscaras

**L**a rapidez con que se han suscitado los últimos acontecimientos políticos, ha generado muchas interrogantes sobre el curso que puede tomar en el futuro cercano y ha abierto una cantidad de expectativas en relación a la contienda electoral del 2011.

La elección de nuevos magistrados en el CSE y la CSJ, la elección de nuevos contralores y procuradores, son ahora las nuevas monedas en la negociación del Pacto. Chantajes, amenazas, presiones y amagos forman parte del baile de máscaras que han puesto en escena las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional para ganar terreno en la negociación. Mientras la sociedad civil organizada presiona por despartidizar a las instituciones. Nada es seguro, todas las alternativas parecen probables mientras la espera da señales de prolongarse hasta mediados del año.

## Despartidización y renovación de cargos en las instituciones

Desde hace mucho tiempo se ha señalado que la partidización de las instituciones estatales es uno de los principales problemas de la democracia nicaragüense. Las sucesivas reediciones del pac-

to entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán han girado alrededor de este tema; sin embargo, nunca como hoy ha tenido tan alto nivel de prioridad e importancia para la democracia.

Este aspecto se ha convertido en el punto central de las negociaciones entre las fuerzas políticas del país en un contexto en el que, el parlamento debe elegir nuevos cargos para la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y el Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, las negociaciones no han transcurrido fluidamente como en otras ocasiones, sino en medio de una crisis entre los diferentes poderes estatales, amenazas y chantajes entre los partidos políticos representados en la Asamblea.

La situación no es casual. La importancia de elegir estos cargos, especialmente los del CSE, descansa en que pueden contribuir a revertir la tendencia autoritaria del proceso político del país y abrir una ventana de oportunidad



para una competencia electoral relativamente transparente en las elecciones generales del 2011.

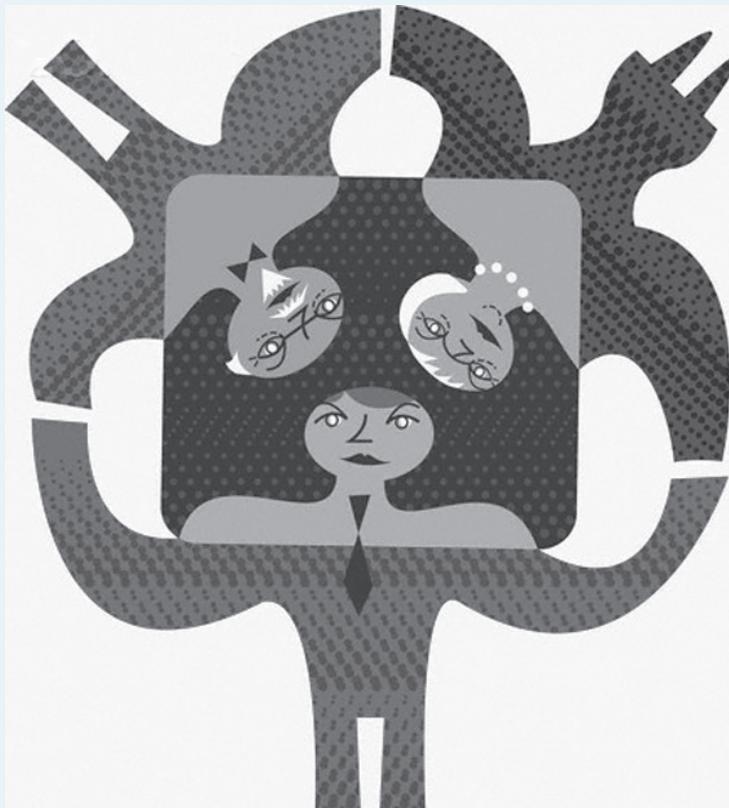
El regateo está trabado en las distintas posiciones que los actores tienen al respecto. El gobierno no quiere ceder ningún cargo porque no está dispuesto a perder el control que ahora tiene sobre el CSE y las demás instituciones estatales. En ese sentido, su apuesta más alta consiste en mantener el status quo. El PLC ve estas elecciones como una oportunidad para lograr un mejor balance de poder y, si es posible, alcanzar la mayoría en las “bancadas” institucionales. Mientras tanto, las demás fuerzas políticas ven en esta circunstancia la oportunidad de despartidarizar las instituciones y asegurar un clima de competencia favorable para las próximas elecciones presidenciales.

Por eso es que la elección del nuevo CSE y la permanencia del bien protegido, Roberto Rivas, es el gran nudo gordiano a resolver en la negociación, por lo menos en esta primera etapa donde todas las fuerzas políticas pujan alcanzar determinadas cuotas de poder y colocar sus fichas más leales en los cargos de elección; mientras el gobierno ha optado por mantener a los titulares actuales en sus cargos a través

de un decreto inconstitucional emitido a inicios del año.

### Chamarrazos, chantajes y presiones

La negociación no ha estado libre de chamarrazos, chantajes y presiones de todos los actores involucrados, pero particularmente de parte del gobierno que ha estado utilizando eficientemente una estrategia de división entre la oposición, alentando el zancudismo, los cañonazos y las ambiciones



personales de sus líderes. Además, nuevamente ha colocado la espada sobre las cabezas de Alemán y Montealegre, reavivando juicios e instalando una campaña pública de desprestigio que se ha convertido de hecho en una persecución política.

Para la estrategia de la división, el gobierno ha tenido a ALN

como al mejor de sus aliados pues, más que jugar el papel de bancada “bisagra”, es obvio que han estado jugando a facilitarle las cosas al partido de gobierno. Claro que tienen sus propios intereses políticos. Colar a uno de sus partidarios entre los nuevos magistrados del CSE es una apuesta que bien vale la pena; sin embargo, es evidente que el acuerdo ya construido con la bancada oficialista es más que coyuntural.

El montaje propagandístico alrededor del caso de los CENIS y los interminables juicios contra Alemán, no tienen otro propósito más que el de intimidar a los dos probables adversarios de Ortega: Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán. En el caso de Montealegre se pretende desde ya inhibirlo para que no pueda presentar su candidatura en las próximas elecciones presidenciales; mientras que en el caso de Alemán la estrategia tiene una doble intencionalidad: hacerlo entrar nuevamente en el ruedo del Pacto y, si es necesario, inhibirlo también de presentarse como candidato para el 2011.

Los afectados intentaron defenderse promoviendo la aprobación de una ley de amnistía en el parlamento pero, además de que era una mala estrategia de defensa, la iniciativa tampoco avanzó entre los diputados. En realidad, en ambos casos una alternativa de solución por esa vía lo único que hace es aplazar la condición de rehenes del gobierno, especialmente en el caso de Alemán.

En medio de esta perversa negociación, la sociedad civil organizada y un sector del empresariado han comenzado a jugar como actores beligerantes, ejerciendo presión sobre las fuerzas políticas parlamentarias para que elijan personas de probada idoneidad en los cargos públicos. Prácticamente todos los partidos políticos y el gobierno incluido, han descalificado en público estas propuestas y planteamientos pretendiendo no darles importancia. Sin embargo, es evidente que tienen capacidad de presión sobre ellos si accedieron a sentarse y firmaron los acuerdos conocidos como Metrocentro I y II, y cuando se ve a Arnoldo Alemán tratando insistentemente de mediatizarlos.

### La estrategia del gobierno

Al mismo tiempo que intenta mantener a la oposición dividida, el gobierno está buscando como cerrar aquellas brechas que no cesan de abrirse y provocar sucesivas contradicciones, desmentidos y versiones maquilladas. El caso del canal 8 de televisión es un ejemplo de esta dinámica. Comprado con fondos del Albánisa, una sociedad con participación de capital público nicaragüense, la operación se sabe teleguiada desde la presidencia. Cuando su gerente venezolano en Nicaragua se atrevió a opinar sobre el caso fue agriamente desmentido por el gobierno y luego, destituido de su cargo, dejando las cosas más enredadas que al inicio.

Las reiteradas justificaciones sobre la precaria situación económica del país, atribuyéndola a la crisis internacional, intentan hacer a un lado el hecho de que el fraude electoral del 2008 y la suspensión de la cooperación al

apoyo presupuestario debilitaron la posición fiscal del gobierno. De ahí que la ley tributaria, bendecida por el COSEP y aprobada con toda urgencia, sea considerada por los especialistas como exclusivamente recaudatoria y nada de equitativa.

Por otra parte, el BID, el FMI y el Banco Mundial que antes

cia del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la participación equitativa de las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos. El gobierno no aceptó 41 de las recomendaciones, pero la lista será revisada nuevamente en junio de este mismo año cuando debe volver ante el Consejo.

Pragmatismo a ultranza y con-



eran criticados por el FSLN y los consideraba la santa trinidad del mal neoliberal, ahora son los tres pilares fundamentales que avalan la “buena gestión” del gobierno y además, le siguen otorgando financiamiento.

Lo único que no le funcionó al gobierno fue la comparecencia en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Mientras intentan consolarse ellos mismos argumentando que el gobierno se vio bien representado y aclamado por sus planes de lucha contra la pobreza; la verdad es que fue cuestionado ampliamente por los países integrantes del Consejo, quienes realizaron 109 recomendaciones en materia de derechos humanos, entre ellas: ejercicio libre del periodismo, la transparen-

taciones sin política consistente. A los tropezones el gobierno avanza sin perder su único objetivo político claro: la reelección de Ortega. Por esa razón, el gobierno no cederá terreno en ningún espacio relacionado con su propósito, especialmente la renovación de los militantes y acólitos designados en las diferentes instituciones públicas.

### Un compás de espera

La elección se encuentra entonces en un compás de espera que seguramente, se prolongará hasta junio de este año, fecha en que se vence el último de los cargos, para dar lugar a los amarres, las tercias y ver quién deja la piel en el camino.



Para la oposición, la firma de los acuerdos de Metrocentro parecía indicar que tanto los partidos como la sociedad civil avanzaban en dirección de un partea guas más claro respecto al gobierno y daba la impresión de un cambio positivo en la correlación de fuerzas para construir el laborioso camino de la unidad. Esta posibilidad le haría perder al gobierno su margen de maniobra para dividir, chantajear, cooptar y empantanar a la oposición.

Pero nada de eso ha ocurrido hasta ahora y ha puesto en claro que el juego transcurre en varias bandas, con subdivisiones. Y que la agenda política de la oposición sigue bastante flexible y gaseosa, sin encontrar un eje sólido de articulación.

Los partidos siguen pensando que todas las soluciones pasan por ellos y la guerra de desgaste está dando sus frutos. En primer lugar los ánimos regresaron al punto de los que sustentan un pragmatismo resignado vs. quienes desean una oposición más consistente y frontal. Los primeros quieren negociar a conveniencia por grupos, sacando tajadas a como se pueda y con objetivos políticos acomodables. Los segundos desean constituirse en una fuerza real de oposición primero, definir una agenda propia y luchar por ella. Entre estos dos rumbos se debate la oposición en todas sus formas.

El derrotero del gran empresario agrupado en el COSEP es sintomático, pues ha aceptado la premisa, muy conveniente al gobierno, de separar los negocios y la política. Bajo ese paraguas de salvación ha entrado en la dinámica de la negociación a conveniencia, dejando los temas políticos institucionales a nivel de enunciado principista.

Mientras, algunas opiniones suspicaces no dejan de lado la influencia de Arnoldo Alemán en

mantener dividida a la oposición, no solamente porque no quiere ceder en su interés de candidatearse para el 2011, sino también porque es parte del juego acordado con su socio estratégico, Daniel Ortega. Un juego a dos bandas en el que Alemán apuesta siempre a ganar aunque su capital de credibilidad político disminuya cada día no sólo entre la población en general, sino también entre la gente de su propio partido.

Mientras tanto, lo más seguro es que los funcionarios que vayan cesando en sus cargos, salvo algunas excepciones, seguirán acomodados en sus sillones amparándose en el ilegal decreto emitido por el Presidente.

### **Las disyuntivas de la oposición**

Hasta ahora nadie ha querido romper los puentes y se quieren dejar todas las puertas abiertas para ir y venir. En un país con reglas democráticas claras, aceptadas y previsibles, una negociación política como esta no tendría mayores consecuencias; pero en Nicaragua, donde lo incierto son precisamente las reglas del juego democrático, cada uno de los aspectos y las personas que hacen parte de la negociación, son decisivos para el futuro del país. De ahí que la oposición tenga frente a ella algunas disyuntivas planteadas para el futuro inmediato.

Algunos sectores políticos tienen la disponibilidad de adaptarse a desenlaces continuistas. En ese caso, si esas fuerzas llegan a prevalecer, la gobernanza de facto continuaría acompañada de la clásica figura del zancudismo, adherido a las prebendas y simulando una oposición que en realidad es socio minoritario.

Los mecanismos de control y subordinación sobre estos sectores pueden adquirir muchas formas, desde puestos para reciclar per-

sonas con diversos orígenes políticos, profesional o institucional, hasta beneficios directos u oportunidades de negocios. Asunto nada nuevo, pues este tipo de manejo de los apoyos políticos ha sido un lubricante constante del proceso político nicaragüense y es lo que precisamente ha marcado su descomposición. La diferencia es que antes este era el instrumento para acompañar las decisiones que se tomaban en materia de reforma económica e institucional, pero ahora es el mecanismo que facilita la consolidación de una estructura de poder centralizada, reñida con el desarrollo de la democracia, la transparencia y la equidad.

Por su lado, quienes están a favor de la apertura democrática sin duda tienen una trinchera estratégica que defender: asegurar la incorporación de personas íntegras, independientes y honestas al CSE, asegurar la observación electoral nacional e internacional durante las próximas elecciones presidenciales, y construir una alternativa política consecuente con el objetivo de retomar la senda democrática para el país. Estas acciones son estratégicas porque, si no se recupera la credibilidad de las elecciones el país podría tomar el rumbo del peor de sus escenarios. En ese sentido, es urgente que los actores políticos con mayor potencialidad democrática tensionen todas sus fuerzas para disciplinar a las fuerzas autoritarias y no se dejen atrapar por los intereses personales y el pragmatismo oportunista de algunos que ya desea verse como los candidatos de la unidad. Una tarea difícil, pero no imposible, especialmente ahora que son las fuerzas democráticas quienes han tomado la iniciativa.

Alcanzar ese objetivo es indispensable para que el país se deshaga del pacto, retome el camino de la democracia y comience un proceso auténtico de regeneración política y moral.